

## **S E S I Ó N   P Ú B L I C A   NÚM. 9**

### **O R D I N A R I A**

**JUEVES 19 DE ENERO DE 2012**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos del jueves diecinueve de enero de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

#### **I. APROBACIÓN DE ACTA**

Proyecto de acta de la sesión pública número ocho, ordinaria, celebrada el martes diecisiete de enero de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

#### **II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves diecinueve de enero de dos mil doce:

## II. 2. 3/2010

Acción de inconstitucionalidad 3/2010 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, demandando la invalidez del artículo 24, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: *“PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad 3/2010. SEGUNDO. Se declara la validez del artículo 24, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en los términos señalados en la presente ejecutoria”*.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando quinto del proyecto, en cuanto propone reconocer la validez del artículo 24, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a partir de su interpretación conforme con la Constitución Federal.

El señor Ministro ponente Franco González Salas indicó que la distinción entre “incapacidad” y “discapacidad”, advertida por el señor Ministro Cossío Díaz, la recoge el

proyecto cuando alude a “discapacidad invalidante” y “discapacidad no invalidante”, señalando que en caso de que el Pleno aceptara la posibilidad de interpretar la norma impugnada conforme a la Constitución, incorporaría algunas consideraciones sobre la distinción de dichos términos, por resultar válidas y otorgar mayor consistencia al proyecto, sin cambiar su esencia.

Agregó que se propone declarar la validez del artículo impugnado bajo la interpretación conforme a la Constitución, en la inteligencia de que dicho precepto sólo se refiere, como causa de revocación de mandato, a la incapacidad permanente invalidante, es decir, a la incapacidad que impide al servidor público desempeñar su función, tomando en cuenta que para garantizar una efectiva y adecuada gobernabilidad del Municipio no es necesario excluir la participación de los miembros del Ayuntamiento cuya incapacidad no constituye un impedimento para el desempeño de sus labores.

Tomando en cuenta que el artículo 5º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que no se considerarán como discriminatorios los requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales, destacó que existe un marco normativo diferenciador en este ámbito, tomando en cuenta la función pública de que se trata y el interés general.

Finalmente, hizo énfasis en que el proyecto reconoce que para revocar un mandato se requiere seguir previamente un procedimiento en el que se cumpla con la garantía de audiencia.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que el señor Ministro Cossío Díaz tuvo razón al distinguir entre “incapacidad” y “discapacidad”, dando lectura a las acepciones relativas que establece el Diccionario de la Real Academia Española.

De dichas definiciones desprendió que la “incapacidad” supone la imposibilidad de realizar una función, mientras que la “discapacidad” sólo se traduce en una merma en las actividades cotidianas del sujeto que la posee, sin que ello implique que no pueda realizarlas. Agregó que, incluso, la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal por la que se prohibió la discriminación hace referencia a la discapacidad, mas no a la incapacidad, dando lectura a la parte de la exposición de motivos donde se justifica introducir a dicha condición como un criterio vedado.

Además, aludió diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, destacando que ésta no se dirige a proteger a las personas de los tratamientos diferenciados que se basen en la “incapacidad”.

De esta manera, indicó que el artículo reclamado, al establecer que puede revocarse el mandato de los miembros del ayuntamiento por incapacidad permanente física o mental, se refiere a los casos en que exista imposibilidad de que el servidor público pueda desarrollar su cargo, y no cuando se encuentre mermado en alguna de sus capacidades, siendo susceptible de que se aplique en su favor alguna medida afirmativa, quedando garantizado el respeto a su condición, en términos de la Ley General citada.

Destacó, por otra parte, que la revocación de mandato no constituye un acto unilateral, pues implica un procedimiento en el que debe respetarse la garantía de audiencia, y donde debe probarse que las medidas afirmativas no son suficientes para evitar que la discapacidad que posee el servidor público derive en una incapacidad que lo imposibilite para desempeñar su cargo, indicando que la incapacidad presupone discapacidad, pero no toda discapacidad deviene en una incapacidad.

Agregó que el precepto impugnado es válido, pues el artículo 1º de la Constitución Federal sólo prohíbe la discriminación hacia personas con discapacidad que, sin embargo, pueden realizar su función con el apoyo de acciones positivas, mientras que aquél se refiere al supuesto de que los munícipes no puedan desarrollar materialmente su empleo, lo que lo distingue de la disposición que prevé determinadas causas que imposibilitan a los militares ejercer sus funciones.

Finalmente, indicó que el problema de constitucionalidad de la disposición impugnada se verificaría en su aplicación, es decir, en el momento de analizar la aptitud del funcionario para desempeñar su cargo, de manera que si se demuestra que está discapacitado y se le revoca el mandato, se verificará un problema de discriminación, pero si se comprueba que existe incapacidad para el desarrollo de sus funciones, la revocación del mandato no estaría viciada.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que no es necesaria la interpretación conforme de la norma impugnada para reconocer la validez del precepto, pues dicho método parte de la distinción entre “discapacidad invalidante” y “discapacidad no invalidante”, siendo suficiente, en cambio, distinguir entre “incapacidad” y “discapacidad”.

Indicó que al no preverse en la norma impugnada condiciones de incapacidad, no se está en posibilidad de distinguir qué situaciones configuran causas graves en términos del artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, estimando que la incapacidad permanente física o mental puede considerarse una razón, *prima facie*, suficientemente fuerte para permitir la revocación del mandato, lo que debe comprobarse en el procedimiento respectivo, tomando en cuenta, en cada caso, el tipo de afectación de que se trate.

Señaló que si bien la legislación protege a las personas con discapacidad, ello no implica que las personas incapacitadas o declaradas incapaces carezcan de derechos fundamentales, indicando que la distinción entre “incapacidad” y “discapacidad” debe sostenerse al tratarse de dos categorías que se diferencian desde el punto de vista físico y médico, siendo relevante aclararlas profundamente, por lo que sugirió al señor Ministro ponente Franco González Salas que se diera contestación al concepto de invalidez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido de que da una lectura al artículo impugnado, como si se refiriera a los casos de discapacidad, cuando en realidad alude a supuestos distintos, debiendo, en todo caso, generarse un estándar riguroso que se observe en su aplicación.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que después de reflexionar sobre el problema planteado, tomando en cuenta el caso del físico Stephen Hawking, llegó a la conclusión de que el precepto impugnado es válido sin que resulte adecuado llevar a cabo su interpretación conforme a la Constitución Federal.

El señor Ministro Valls Hernández también sostuvo que el precepto impugnado no requiere ser sujeto a una interpretación conforme para estimarlo constitucional, pues la causa de revocación de mandato que establece no se encuentra prevista en el artículo 1º constitucional como uno de los criterios de discriminación vedados, ya que se refiere

al caso en que la capacidad para el ejercicio del cargo se encuentra anulada, impidiendo al integrante del ayuntamiento cumplir con el mandato que le fue conferido, lo que no puede entenderse de otra forma y en ningún modo vulnera la Constitución Federal, tomando en cuenta que la finalidad que persigue la norma es garantizar la gobernabilidad en el Municipio.

Por último, señaló que en el proyecto deben citarse los preceptos legales que establecen el procedimiento de revocación de mandato, donde se respete la garantía de audiencia, debiendo precisarse que sólo los dictámenes médicos pueden justificar que existe incapacidad del munícipe para el desempeño de su cargo.

El señor Ministro Aguilar Morales coincidió con la distinción entre “incapacidad” y “discapacidad”, que expuso la señora Ministra Luna Ramos; la que apoyó con base en la etimología.

Señaló que el precepto impugnado se refiere a la incapacidad para desempeñar el cargo y no a una incapacidad general o absoluta, entendiendo por incapacidad aquella circunstancia que imposibilita al servidor público, precisamente, a ejercer sus funciones, y que impide al órgano público continuar trabajando de manera adecuada y conveniente para la sociedad, lo que debe ser probado a través de los medios que se establecen, estimando que, en este sentido, la disposición impugnada resulta constitucional.



El señor Ministro Pardo Rebolledo señaló que si bien coincide en que no debe confundirse “incapacidad” con “discapacidad”, expresó interrogantes sobre si las autoridades tendrían la agudeza, precisión y profundidad de los conocimientos que se han expresado, indicando que el concepto de “incapacidad” ha venido evolucionando en el ámbito de la no discriminación.

Indicó que cada persona tiene algún grado o aspecto de incapacidad, pues existen habilidades que no les son propias, estimando adecuado que se llegue a un nivel alto en cuanto la especificación de los términos, aunque ello no haya permeado en toda la población, la legislación o en los criterios de interpretación. Puso como ejemplos los artículos 477, 478, 749 y 480 de la Ley Federal del Trabajo, indicando que pudieran estimarse inconstitucionales al no establecer distinciones en relación con el concepto tradicional de incapacidad a que se refieren.

Estimó que de acuerdo con la legislación referida la incapacidad puede ser parcial o total, por lo que el precepto impugnado podría considerarse discriminatorio si se entendiera que comprende a la incapacidad parcial, por lo que consideró que no es incorrecto proponer la interpretación conforme, pues conduce a que se distinga cuándo una circunstancia puede impedir el desempeño de las funciones, ante la posibilidad de que la autoridad interprete la norma en el sentido de que permite revocar un mandato cuando exista una incapacidad parcial, en términos

de la ley laboral, aunque ello no obstaculice el desempeño del cargo.

Por último, hizo énfasis en que el Pleno debe dejar claro que resulta necesario llevar a cabo un análisis muy cuidadoso para determinar si una circunstancia específica impide el desarrollo de la función pública.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que la norma combatida es inconstitucional, al ser claramente discriminatoria y no resultar acorde con la finalidad y la naturaleza de la figura de revocación de mandato que prevé el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, pues los supuestos que prevé no le son propios, estimando que, con independencia de la distinción entre “incapacidad” y “discapacidad”, el precepto impugnado establece categóricamente una condición de permanencia en un cargo público de elección popular, que tiene relación directa con el estado de salud de la persona que lo detente, con lo que se genera una situación discriminatoria para ésta, pues lo afecta en su derecho fundamental al ejercicio de dicho cargo, por su simple condición de salud, entendida como un estado de bienestar general que integra el aspecto físico, mental, emocional y social.

En este sentido, señaló que la causa de revocación consistente en la incapacidad permanente física es en sí misma discriminatoria, por lo que no coincide en que el

precepto impugnado pueda interpretarse conforme a la Constitución, estimando que su validez no deriva de que puedan distinguirse grados de incapacidad.

Agregó que aun cuando los conceptos “incapacidad” y “discapacidad” son distintos, ambos pueden guardar relación con la condición de salud de una persona en tanto que implican una merma en la capacidad de las personas, indicando que la reserva legislativa que prevé el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal para que los Estados establezcan las causas graves que justifiquen la revocación del mandato de los munícipes no implica el establecimiento arbitrario de alguna causa que no guarde congruencia con la actuación que el funcionario desarrolla, y que tome en cuenta su situación particular, en tanto ésta puede resultar ajena a su voluntad y dependiente de una condición de salud, como lo es la incapacidad permanente física, la cual no puede actualizar una causa grave que amerite la revocación del mandato, ya que la condición de salud no puede impedir, por sí misma, la permanencia de una persona en el cargo al que accedió por mandato popular y en ejercicio de un derecho fundamental.

Indicó que el supuesto normativo impugnado no guarda razonabilidad constitucional con la figura regulada, ya que no debe prescindirse de que la propia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece un sistema de suplencia de los miembros del Ayuntamiento, que tiene la finalidad de salvaguardar tanto la

propia integración como la continuidad en el funcionamiento de los órganos de gobierno.

El señor Ministro Presidente Silva Meza expresó que si bien los términos “incapacidad” y “discriminación” se usan de forma indistinta en el lenguaje cotidiano, para efectos de una determinación jurídica, debe reconocérseles una connotación constitucional y legal específica, lo que lleva a considerar innecesaria la interpretación conforme, siendo más clara una interpretación directa, en la que se considere que toda incapacidad implica una discapacidad pero no toda discapacidad se traduce en una incapacidad, de forma que el problema no se reduzca a decidir si la norma es discriminatoria o no, pues ello conduciría a declarar su inconstitucionalidad.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que la determinación mayoritaria en el sentido de que no debía suplirse la deficiencia de la queja se traduce en una distorsión peligrosa que se confirma con la probable votación que se dará en este asunto, considerando que la causa de revocación de mandato relativa a la incapacidad mental permanente si es abiertamente inconstitucional, sin que pueda efectuarse una interpretación conforme, tomando en cuenta que no está prevista la garantía de que exista una declaración judicial previa que declare la interdicción del funcionario.

Estimó que si bien “incapacidad” y “discapacidad” son términos distintos, no es correcto que puedan desvincularse completamente. Después de dar lectura a la distinción entre deficiencia, incapacidad y minusvalidez establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, señaló que la discapacidad implica una incapacidad para ciertas actividades, y no necesariamente para realizar una función pública, indicando que no necesariamente toda incapacidad derivada de una discapacidad puede dar lugar a un acto discriminatorio, pues existen ciertas actividades que una persona no puede realizar debido a sus padecimientos.

Consideró que aun cuando se distinga nítidamente entre “incapacidad” y “discapacidad”, puede verificarse una discriminación por incapacidad, por lo que estimó que para salvar la validez de la norma sí es necesario hacer una interpretación conforme a la Constitución, aunque no necesariamente la que propone el proyecto, indicando que las opiniones a favor de la constitucionalidad de la norma constituyen diversas interpretaciones conformes, tomando en cuenta que de la literalidad del precepto se advierte que sí resulta discriminatorio, pues la incapacidad permanente física no conlleva necesariamente la imposibilidad para desempeñar un cargo público.

En estos términos, consideró que la causa de revocación de mandato impugnada debe interpretarse en el sentido de que se refiere a la incapacidad que impide el

desempeño de la función, y no a cualquier incapacidad física permanente, ya que sólo de esa forma se actualizaría la causa grave a que se refiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal.

Señaló, además, que no es necesario realizar una interpretación conforme en el sentido de que en el procedimiento revocatorio debe respetarse la garantía de audiencia, ya que esto es un requisito establecido tanto en la Constitución Federal como en la del Estado y en la Ley Orgánica del Congreso local.

Concluyó en que no existe discriminación cuando se impide a una persona llevar a cabo una función pública que no puede desempeñar debido a una imposibilidad material, y que cualquier tipo de incapacidad que no impida el desempeño del cargo no podría justificar válidamente el impedimento, por lo que debe establecerse claramente la forma en que debe interpretarse la incapacidad física permanente como condición de validez de la norma.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que cuando se reconoce la constitucionalidad de una norma existe una interpretación, aunque sea mínima, que convalida la conformidad de su texto con la Norma Fundamental, indicando que la “interpretación conforme” se requiere cuando existen diversas interpretaciones: unas que pudieran ser coincidentes con aquélla y otras que pudieran ser contrarias.

En este sentido, señaló que no se requiere efectuar la interpretación conforme de la norma pues ésta sólo admite una alternativa para ser interpretada, estimando que no podría considerarse discriminatoria ya que no sería contrario a la dignidad humana impedir a alguien desempeñar un cargo público cuando está incapacitado física y mentalmente para hacerlo, ni tendría como finalidad menoscabar sus derechos y libertades.

El señor Ministro ponente Franco González Salas indicó que si bien no existe ni puede existir una distinción tajante entre “incapacidad” y “discapacidad”, ya ha aceptado el planteamiento del señor Ministro Cossío Díaz de establecer esta diferenciación conceptual, indicando que en la definición de discapacidad proporcionada por organismos internacionales está inmersa la condición de incapacidad y que existen diversos precedentes jurídicamente iguales al presente asunto en el que se ha efectuado la interpretación conforme.

Después de aceptar la sugerencia del señor Ministro Valls Hernández relativa a citar las normas que regulan el procedimiento de revocación y que garantizan el derecho de audiencia previa, indicó que sostendrá la interpretación conforme que propone el proyecto considerando que si bien se ha tratado de distinguir nítidamente entre “incapacidad” y “discapacidad”, tanto los documentos internacionales como la legislación interna establecen distintos niveles de incapacidad, de manera que podría entenderse que un

síndico ha sufrido una incapacidad permanente total cuando ha perdido un dedo o un pie.

En estos términos, estimó que la incapacidad será causa grave para efectos de revocación de mandato cuando impida desempeñar el cargo público, indicando que esto constituye una interpretación conforme. Afirmó que, en todo caso, el proyecto necesariamente deberá establecer que la incapacidad permanente a que refiere el precepto impugnado debe conllevar la imposibilidad para el desarrollo de las funciones, pues de lo contrario no podría considerarse que se actualiza una causa grave que justifique el impedimento.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que la Ley Federal del Trabajo es anterior a la reforma al artículo 1º constitucional en la que se establece el derecho a la no discriminación por motivos de discapacidad. Destacó la importancia de señalar que la incapacidad permanente debe estar relacionada con el desempeño del cargo y manifestó que la incapacidad mental no podría darse sin previa declaratoria de interdicción, tomando en cuenta que en el artículo 23 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco se prevé que la incapacidad mental que justifique la suspensión de los miembros del ayuntamiento debe ser declarada judicialmente, pudiéndose entender que la suspensión en el cargo conllevará a la revocación de mandato.



Estimó que la interpretación conforme planteada se origina a partir de un problema en la aplicación del precepto y no de la constitucionalidad de su contenido, pues en cada caso deberá juzgarse si una incapacidad específica constituye una causa grave para efectos de revocación de mandato o si sólo se traduce en un problema de discapacidad que no autoriza dicho acto.

El señor Ministro Franco González Salas aclaró que se está analizando la figura de la incapacidad. Indicó que ésta tiene connotaciones de carácter laboral, y que universalmente se ha reconocido que se presenta en grados y en diferentes temporalidades, estimando que esto no tiene relación con que en el artículo 1º constitucional se haya reconocido el derecho a la no discriminación por razón de discapacidad.

Señaló que se prevé la necesidad de declaración judicial respecto de la incapacidad mental para efectos de la suspensión de mandato, pero no para su revocación, por lo que era importante determinar la suplencia en relación con este aspecto.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que si se prevé el requisito de la declaratoria de interdicción para el caso de la suspensión del mandato, por mayoría de razón debe preverse para el supuesto de revocación.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que refirió al problema de la declaratoria de interdicción para

señalar que expondría un tratamiento diverso a partir de que no se determinó suplir la deficiencia de la queja, indicando que resulta grave que en el artículo impugnado no se prevea que la incapacidad permanente mental debe ser declarada judicialmente.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia señaló que debe contestarse al promovente de la acción que la interpretación que efectúa del precepto impugnado es incorrecta, dado que no es lo mismo “incapacidad” y “discapacidad”, estimando que, para efectos de ese artículo, por aquélla debe entenderse la imposibilidad de atender el cargo conforme a las exigencias que le son inherentes, lo que constituye una recta interpretación del precepto, en conexión con otras disposiciones jurídicas, y no una conforme a la Constitución.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto, por mayoría de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza, se reconoció la validez del artículo 24, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con el voto en contra de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Aguilar Morales, Valls Hernández, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza votaron en contra de

*Sesión Pública Núm. 9      Jueves 19 de enero de 2012*

que este reconocimiento de validez se sustente en una interpretación conforme a la Constitución Federal.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas reservó su derecho para formular voto particular, y el señor Ministro Aguilar Morales, para formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que no tendría inconveniente en ajustar las consideraciones conforme al criterio mayoritario, plasmando debidamente la distinción entre “incapacidad” y “discapacidad”. Además, pidió que se realizaran votos concurrentes en caso de que no se estuviera de acuerdo con el engrose.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las doce horas con cincuenta y cinco minutos, y reanudó la sesión a las trece horas con veinte minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

## **II. 3.13/2010**

Controversia constitucional 13/2010 promovida por el Estado de Baja California contra la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, demandando la invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial el veintinueve de diciembre de dos mil

nueve. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández se propuso: *“ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional”*.

El señor Ministro ponente Valls Hernández presentó su proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando primero, relativo a la competencia, el cual se aprobó por unanimidad de once votos. Enseguida, sometió a discusión el considerando segundo en cuanto propone determinar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el inciso e) de la fracción I del propio precepto constitucional.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó no compartir el sentido del proyecto. Señaló que la propuesta se sustenta con argumentos que corresponden al fondo del asunto, contraviniendo el criterio de este Alto Tribunal en el sentido de que el sobreseimiento por falta de interés jurídico debe decretarse cuando la inviabilidad de la acción es evidente, sin involucrar el estudio de fondo.

Señaló que lo anterior se evidencia con el hecho de que el sobreseimiento se sustenta en el estudio de fondo realizado en la acción de inconstitucionalidad 2/2011, promovida en contra de los mismos artículos del Código Civil del Distrito Federal que se controvierten en este asunto.

Para demostrar lo anterior, dio lectura a las consideraciones de dicho precedente, en las que se interpretó el artículo 121, fracciones I y IV constitucionales, destacando que el engrose realizado no corresponde a la discusión que se dio.

Agregó que no es correcta la aplicación de ese precedente al presente caso, pues ahí no se estudiaron los efectos del reconocimiento de un acto del estado civil cuando se presente un conflicto de normas entre el Estado emisor y el Estado receptor del acto, dado que el conflicto mencionado representaba un planteamiento hipotético por parte del promovente, bajo la premisa de que la acción de inconstitucionalidad constituye un medio de defensa abstracto.

Señaló que, por el contrario, en el presente asunto el promovente acude a esta vía ante la existencia del conflicto actualizado entre su legislación interna y la del Distrito Federal, de ahí que el sobreseimiento por falta de interés legítimo implica una desestimación a priori del planteamiento respectivo, advirtiéndole que con ello no quiere expresar que la entidad promovente tenga la razón en el fondo, pues ello habrá de estudiarse.

Indicó que la falta de interés legítimo podría aceptarse siempre que se sustente en que conforme a las fracciones I y IV del artículo 121, constitucional, el reconocimiento de validez de los actos del estado civil, celebrados conforme la legislación de una entidad, no supone que surtirán

válidamente sus efectos en el territorio de otros Estados, de forma que aun cuando todas las entidades deben reconocer el matrimonio conformado por personas del mismo sexo, ello no se traduce en que también deban aplicar sus efectos aun cuando éstos vulneran su legislación interna.

Destacó que el artículo 1º constitucional obliga actualmente a interpretar los principios de federalismo y soberanía en el régimen interno de los Estados, favoreciendo la más alta protección a los derechos humanos, conforme a la Constitución y los tratados internacionales, en los que se reconoce el interés superior del menor, el cual supone que el desarrollo de los niños y el ejercicio pleno de sus derechos sean rectores de la elaboración y aplicación de las normas en todos los ámbitos.

De esta forma, indicó que sostener que un Estado carece de interés para combatir las normas de otro Estado que permitan la adopción de menores por parejas del mismo sexo niega a dicha entidad la posibilidad de defender lo que, atendiendo a la particular situación socio cultural que impere en su población, resulte mejor para el interés superior del menor, a no ser que se determine que el reconocimiento del matrimonio conformado por parejas del mismo sexo no tiene como efecto obligar al Estado receptor a permitir la adopción por ese tipo de matrimonios.

Después de dar lectura a algunas de las consideraciones expuestas por los señores Ministros Franco

González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente Silva Meza, Aguilar Morales, Luna Ramos y Cossío Díaz, al discutir la acción de inconstitucionalidad referida, señaló que en el engrose de ésta no se reconoce expresamente la diferencia entre validez y efectos, ni se reserva a los Estados determinar los efectos conforme a su régimen interno, como sostuvo la mayoría, indicando que con ello no pretende discutir el fondo del asunto sino denotar que las razones que sustentan la propuesta del proyecto carecen de coherencia interna y no corresponden a lo discutido por el Pleno en aquella ocasión.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó que quienes formaron parte de la minoría al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2011 no tienen legitimación para cuestionar el engrose, siendo su postura completamente distinta, dando lectura al criterio contenido en la tesis P.J. 12/2011, que derivó de dicho asunto.

Señaló que la presente controversia constitucional no se promovió a partir de un caso concreto, pues se impugnan las mismas normas del Código Civil del Distrito Federal que se controvirtieron en la acción de inconstitucionalidad referida, y por las mismas razones que ahí se esgrimieron, considerado que, por ello, estaría de acuerdo en sobreseer en el presente asunto, aunque con fundamento en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la materia, conforme al cual la controversia constitucional es improcedente en contra de normas generales o actos que

hubieran sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo de la Constitución Federal.

Estimó que dichos requisitos se satisfacen pues en el presente asunto se impugnan las mismas normas a través de conceptos de invalidez iguales, además de que en la acción de inconstitucionalidad no existen partes, considerando que entrar al fondo de esta controversia conduciría a modificar lo ya resuelto.

El señor Ministro Cossío Díaz reservó hacer uso de la palabra para la siguiente sesión.

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el lunes veintitrés de enero del año en curso, a partir de las once horas, y levantó esta sesión a las catorce horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.